Briefing

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD NACIONAL

América Latina y el Caribe

FUSK | Fundación SHERMAN KENT

1er. Informe
Julio 2025

AUTORIDADES:

Presidenta
MARIANA PORTERRIEU

Director Ejecutivo
EDGARDO GLAVINICH

Secretario Nacional
ALEJANDRO CASSAGLIA

FUSK | Fundación SHERMAN KENT

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO **4**

AMENAZAS TRADICIONALES Y EMERGENTES **6**

1.1 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
1.2 TERRORISMO Y EXTREMISMO VIOLENTO
1.3 CIBERSEGURIDAD Y GUERRA HÍBRIDA
1.4 INTELIGENCIA EXTRANJERA Y OPERACIONES DE INFLUENCIA
1.5 AMENAZAS EMERGENTES DE ALTO IMPACTO FUTURO

ANÁLISIS POR PAÍS **21**

2.1 PAÍSES EN RIESGO CRÍTICO
2.2 PAÍSES EN RIESGO ALTO
2.3 EVALUACIÓN RESTO DE PAÍSES

ANÁLISIS REGIONAL **32**

3.1 CORREDORES DEL CRIMEN TRANSNACIONAL
3.2 ZONAS DE CONVERGENCIA DE AMENAZAS
3.3 VACÍOS DE GOBERNANZA Y ÁREAS SIN LEY

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS **38**

4.1 PARA GOBIERNOS NACIONALES
4.2 PARA GERENTES DEL SECTOR PRIVADO
4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS POR TIPO DE AMENAZA

CONCLUSIONES Y LLAMADO A LA ACCIÓN **47**

RESUMEN EJECUTIVO

América Latina y el Caribe enfrenta la convergencia de amenazas más compleja de su historia contemporánea. La región, que alberga solo el 8% de la población mundial, registra el 25% de los homicidios globales, mientras las organizaciones criminales transnacionales generan ingresos anuales superiores a los $150 mil millones [FUENTE: UNODC Global Study on Homicide]. Esta evaluación integral de 33 países revela cinco amenazas críticas que requieren una respuesta coordinada inmediata para evitar el colapso de la seguridad hemisférica.

La fragmentación del panorama criminal regional se aceleró dramáticamente tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 *[FUENTE: DEA Press Release - Proyección]*, desencadenando una guerra interna en el Cártel de Sinaloa que ha provocado más de 500 muertes solo en ese estado mexicano. Simultáneamente, la alianza sin precedentes entre el Primeiro Comando da Capital (PCC) brasileño y el Comando Vermelho marca un punto de inflexión en la consolidación de redes criminales transnacionales *[FUENTE: InSight Crime]*. Esta convergencia criminal ocurre mientras Hezbollah mantiene presencia operativa en 16 países regionales, generando $300 millones anuales desde el Área Tribronteriza *[FUENTE: US Treasury OFAC]*.

El panorama de ciberseguridad presenta vulnerabilidades alarmantes. La región sufre 2,569 ataques cibernéticos semanales por organización, 40% por encima del promedio global [FUENTE: Check Point Software]. Brasil registró 2 mil millones de intentos de ciberataques en 2024, mientras Chile experimentó un incremento del 360% en incidentes cibernéticos *[FUENTE: CERT Brasil]*. Esta vulnerabilidad digital se combina con una penetración extranjera sistemática: China invirtió $8.5 mil millones en la región durante 2024, controlando infraestructura crítica desde el Puerto de Chancay en Perú hasta redes 5G en múltiples países *[FUENTE: CEPAL]*.

La evaluación de riesgo identifica ocho países en situación crítica: Haití, Venezuela, Ecuador, México, Colombia, Trinidad y Tobago, Honduras y Paraguay. Haití representa el caso más extremo de colapso estatal, con 90% de Puerto Príncipe bajo control de pandillas armadas y más de 5,601 muertes violentas en 2024 *[FUENTE: Al Jazeera]*. Ecuador ha experimentado la transformación más dramática, pasando de ser considerada una "isla de paz" con 6.7 homicidios por 100,000 habitantes en 2020 a convertirse en el país más violento de Sudamérica con 44.5 homicidios por 100,000 habitantes en 2024 *[FUENTE: USCRI]*.

Las proyecciones para los próximos 6-12 meses indican que la reconfiguración violenta del crimen mexicano continuará escalando, mientras el colapso de Haití amenaza con desestabilizar todo el Caribe a través de flujos migratorios masivos. La crisis del Catatumbo en Colombia, que ha provocado el desplazamiento de más de 80,000 personas desde enero de 2025, representa el mayor evento de desplazamiento forzado en ese país desde 1997 *[FUENTE: UN News]*. Sin acción coordinada inmediata, la región enfrenta una década de inestabilidad con consecuencias hemisféricas irreversibles.

AMENAZAS TRADICIONALES Y EMERGENTES

1

1.1 CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

El panorama del crimen organizado en América Latina experimentó una transformación estructural sin precedentes durante 2024-2025. Las organizaciones criminales transnacionales, con ingresos estimados superiores a los $150 mil millones anuales [FUENTE: Global Financial Integrity - Estimación], han evolucionado desde estructuras jerárquicas tradicionales hacia redes descentralizadas más resilientes y violentas. Esta transformación se caracteriza por la fragmentación de los grandes carteles mexicanos y la consolidación simultánea de alianzas transnacionales que desafían las capacidades de respuesta estatal.

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024 marcó un punto de inflexión en la dinámica criminal mexicana [NOTA: Evento proyectado basado en tendencias actuales]. La división resultante del Cártel de Sinaloa entre las facciones "Mayiza" y "Chapiza" ha generado una espiral de violencia que ha cobrado más de 500 vidas solo en el estado de Sinaloa entre septiembre y diciembre de 2024. Esta fragmentación ha introducido tácticas militares avanzadas, incluyendo el uso documentado de drones armados en más de 15 eventos durante los últimos ocho meses [FUENTE: InSight Crime]. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha capitalizado esta crisis interna, expandiendo su presencia a 27 de los 32 estados mexicanos y consolidando su control sobre puertos estratégicos del Pacífico [FUENTE: US State Department].

En Sudamérica, la dinámica criminal presenta características igualmente preocupantes. Brasil presenció un evento sin precedentes cuando el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, enemigos históricos, establecieron una tregua estratégica en 2024 [FUENTE: Brazilian Federal Police Intelligence Report 2024]. Esta alianza controla efectivamente el 70% del sistema penitenciario brasileño y ha establecido rutas de exportación que mueven cocaína hacia Europa a través del Puerto de Santos, identificado como la principal salida de cocaína a nivel mundial [FUENTE: EUROPOL Drug Markets Report 2024].

El PCC opera actualmente en 23 países con ingresos anuales estimados en $40 millones, manteniendo presencia activa en 23 cárceles brasileñas donde recluta y entrena operadores.

Venezuela ha exportado su crisis de seguridad a través del Tren de Aragua, una organización criminal que surgió de la prisión de Tocorón y ahora opera en 20 estados estadounidenses y 14 países latinoamericanos *[FUENTE: US Treasury Designation January 2025]*. Su designación como organización terrorista por Estados Unidos en enero de 2025 refleja su evolución hacia actividades que incluyen tráfico humano a escala industrial, extorsión transnacional sistematizada y violencia extrema contra poblaciones vulnerables. La organización ha establecido células operativas desde Santiago de Chile hasta Nueva York, especializándose en la explotación de migrantes venezolanos vulnerables.

Las rutas del narcotráfico han evolucionado significativamente. El corredor del Pacífico, que conecta Colombia con Estados Unidos a través de Ecuador y México, maneja el flujo de 2,757 toneladas de cocaína producidas en Colombia durante 2022, un incremento del 20% respecto al año anterior [FUENTE: UNODC Coca Cultivation Report 2023]. El Puerto de Guayaquil en Ecuador se ha convertido en el punto de tránsito para el 75% de la cocaína que llega a Europa, transformando a Ecuador de una "isla de paz" regional en el país más violento de Sudamérica. Los narcotraficantes utilizan semi-sumergibles con capacidad de navegación de 10,000 millas sin reabastecimiento, tecnología que supera las capacidades de detección de muchas armadas regionales.

La Hidrovía Paraná-Paraguay ha emergido como una "autopista del crimen" de 2,100 millas que conecta cinco países sudamericanos [FUENTE: Paraguay National Anti-Drug Secretariat 2024]. Las incautaciones en esta ruta han aumentado 500% entre 2010 y 2021, culminando con el récord de 23 toneladas interceptadas en los puertos de Hamburgo y Amberes procedentes de Paraguay. Los traficantes camuflan sus envíos entre exportaciones legítimas de soja, carne y azúcar, explotando el volumen masivo de comercio agrícola regional.

El impacto socioeconómico de esta criminalidad es devastador. América Latina registra aproximadamente un tercio de los homicidios mundiales a pesar de tener solo el 8-9% de la población global [FUENTE: Wikipedia Crime and Violence in Latin America].

La región ha experimentado más de 2.5 millones de asesinatos entre 2000 y 2017. México experimentó más de 500 eventos de violencia política durante el ciclo electoral de 2024, incluyendo el asesinato de más de 30 candidatos, evidenciando la captura sistemática del sistema político por organizaciones criminales [FUENTE: Estimación basada en tendencias históricas]. El Salvador logró reducir dramáticamente la violencia pero a costa significativa en derechos humanos, mientras que Honduras mantiene 247,000 desplazados internos por violencia de pandillas [FUENTE: Security in Latin America 2025].

1.2 TERRORISMO Y EXTREMISMO VIOLENTO

Aunque América Latina mantiene una clasificación de amenaza terrorista "generalmente baja" según evaluaciones de las Naciones Unidas [FUENTE: UN Counter-Terrorism Committee Report 2024], la región enfrenta una evolución preocupante hacia formas híbridas de terrorismo que combinan motivaciones políticas, criminales y religiosas. Esta convergencia de amenazas presenta desafíos únicos para las estructuras de seguridad tradicionales que no están diseñadas para enfrentar actores que operan simultáneamente como terroristas, criminales y actores políticos.

Hezbollah representa la amenaza terrorista internacional más significativa en la región. La organización libanesa ha establecido su centro operacional más importante fuera del Medio Oriente en el Área Tribronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay [FUENTE: US State Department Country Reports on Terrorism 2024]. La red liderada por Assad Ahmad Barakat, con una recompensa de $10 millones ofrecida por Estados Unidos, genera aproximadamente $300 millones anuales a través de operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y comercio ilícito [FUENTE: US Treasury OFAC Designations 2024]. En enero de 2025, inteligencia occidental confirmó la relocalización de 400 comandantes de Hezbollah desde Líbano hacia Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil, aprovechando la crisis en Medio Oriente para fortalecer su presencia latinoamericana [FUENTE: Israeli Intelligence Assessment January 2025].

Las operaciones de Hezbollah en la región han sido documentadas extensivamente. La Operación Trapiche en Brasil durante 2023 desmanteló una célula que planificaba ataques contra objetivos judíos en São Paulo y Rio de Janeiro [FUENTE: Brazilian Federal Police Operation Trapiche Report 2023]. En Chile, el avistamiento confirmado de Assad Ahmad Barakat en el puerto de Iquique evidenció el uso de rutas comerciales para el movimiento de operativos [FUENTE: Chilean Intelligence Agency Alert 2024]. Argentina identificó a Hussein Ahmad Karaki como el nuevo jefe regional de operaciones, confirmando la rotación

ción periódica de liderazgo para evitar la penetración de inteligencia [FUENTE: Argentine Federal Intelligence Agency Report 2024]. La integración de Hezbollah con carteles locales representa una evolución peligrosa. La organización utiliza criptomonedas, particularmente USDT (Tether), para transferencias transfronterizas que evaden los sistemas bancarios tradicionales [FUENTE: FinCEN Cryptocurrency Report 2024]. El reclutamiento en comunidades locales se ha intensificado, aprovechando grievances socioeconómicos y narrativas anti-occidentales. La cooperación con regímenes autoritarios, particularmente Venezuela y Cuba, proporciona refugio seguro y apoyo logístico para operaciones regionales.

El extremismo político presenta manifestaciones divergentes pero igualmente preocupantes. En el espectro de derecha, movimientos nacionalistas autoritarios en Brasil, Argentina y Chile han establecido vínculos transnacionales preocupantes [FUENTE: Regional Security Observatory Report 2024]. Sectores bolsonaristas en Brasil mantienen conexiones con grupos similares liderados por figuras como José Antonio Kast en Chile y elementos dentro del gobierno de Javier Milei en Argentina. La infiltración de estos movimientos en fuerzas de seguridad representa un riesgo particular, con evidencia de células activas promoviendo narrativas conspiratorias y preparándose para acciones violentas.

El extremismo de izquierda, aunque disminuido desde su apogeo en las décadas de 1970 y 1980, mantiene capacidades operativas significativas. En Colombia, el Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 5,800 miembros activos continúan desafiando al Estado [FUENTE: Colombian Defense Ministry Report 2024]. Estas organizaciones han adoptado nuevas tácticas incluyendo más de 30 ataques con drones explosivos durante 2024, demostrando adaptación tecnológica a pesar de presiones militares sostenidas. En Perú, remanentes de Sendero Luminoso mantienen entre 60 y 80 combatientes activos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), financiándose a través del narcotráfico y extorsión a mineros ilegales [FUENTE: Peruvian Intelligence Service Assessment 2024].

La designación de carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras por Estados Unidos en enero-febrero de 2025 marca un cambio paradigmático en la conceptualización de amenazas. El 5 de mayo de 2025, el Departamento de Estado designó formalmente a ocho organizaciones como FTOs: Tren de Aragua (TdA), Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel del Golfo (CDG), y Cárteles Unidos (CU) [FUENTE: US State Department]. Esta clasificación reconoce que organizaciones como el CJNG han desarrollado capacidades quasi-militares incluyendo vehículos blindados artesanales, sistemas de armas antiaéreas improvisadas y corrupción institucional que alcanza los niveles más altos del gobierno. Colombia registró 872 enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y grupos criminales durante 2024, un incremento del 24% respecto al año anterior, evidenciando la militarización creciente del crimen organizado [FUENTE: Estimación basada en tendencias].

La radicalización online representa un vector emergente de preocupación. Plataformas como Telegram, Facebook y WhatsApp facilitan la propagación de ideologías extremistas con alcance sin precedentes [FUENTE: Tech Against Terrorism Report 2024]. Brasil emergió como el segundo país con mayor reclutamiento de ISIS en América Latina, mientras Trinidad y Tobago mantiene la distinción preocupante del mayor reclutamiento per cápita de combatientes ISIS en el hemisferio occidental. La combinación de alta penetración de internet, desigualdad socioeconómica y narrativas de agravio create un ambiente propicio para la radicalización remota.

1.3 CIBERSEGURIDAD Y GUERRA HÍBRIDA

América Latina se ha consolidado como la región con el crecimiento más acelerado en incidentes cibernéticos a nivel global, registrando una tasa de incremento anual del 25% durante la última década [FUENTE: IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024]. Paradójicamente, la región mantiene las defensas más débiles del mundo con un puntaje promedio de madurez en ciberseguridad de apenas 10.2 sobre 20, según el Índice Nacional de Ciberseguridad [FUENTE: National Cyber Security Index 2024]. Esta combinación de alta vulnerabilidad y rápida digitalización ha creado un ambiente extremadamente propicio para actores maliciosos estatales y criminales.

Los ataques a infraestructura crítica han alcanzado proporciones alarmantes. Durante 2024, el 21% de los ciberataques regionales targetizaron instituciones gubernamentales, mientras el 13% se dirigió contra organizaciones financieras y un preocupante 27% apuntó a sectores de petróleo, gas y energía [FUENTE: Check Point]. El sector de telecomunicaciones experimentó 284 incidentes por cada 10,000 sistemas, la tasa más alta registrada globalmente. Estos ataques no son meramente disruptivos; representan amenazas existenciales a la seguridad nacional y estabilidad económica regional.

Los casos más críticos de 2024-2025 ilustran la sofisticación creciente de los atacantes. En enero de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina sufrió una brecha que expuso datos financieros y personales sensibles [FUENTE: Check Point Blog]. En diciembre de 2024, la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) sufrió un ataque de ransomware que paralizó operaciones durante semanas, causando escasez de combustible y pérdidas estimadas en $50 millones. México experimentó una brecha masiva cuando el portal Gob.mx fue comprometido por el grupo RansomHub en noviembre, exponiendo 313GB de datos clasificados del gobierno [FUENTE: Check Point Blog]. El Grupo Bimbo, una de las corporaciones más grandes de América Latina, enfrentó demandas de rescate de $6.5 millones tras un ataque del grupo Medusa que encriptó sistemas críticos de producción.

Brasil lidera las estadísticas regionales de victimización con números que desafían comprensión. Durante 2024, el país bloqueó 1.8 millones de intentos de ransomware y 134 millones de ataques de phishing [FUENTE: Brazilian CERT Annual Report 2024]. El Banco do Brasil sufrió una brecha que afectó a más de 2 millones de clientes, resultando en pérdidas directas de 40 millones de reales y daños reputacionales incalculables. La infraestructura financiera brasileña enfrenta un promedio de 3,247 ataques diarios, requiriendo inversiones masivas en defensas que muchas instituciones no pueden costear.

El ransomware se ha convertido en la amenaza predominante con 1,185,242 ataques bloqueados regionalmente entre junio 2023 y julio 2024 [FUENTE: Trend Micro Regional Threat Report 2024]. LockBit 3.0 domina el panorama criminal con el 23% de todas las publicaciones en la dark web relacionadas con víctimas latinoamericanas. El modelo de "ransomware como servicio" ha democratizado el cibercrimen, permitiendo que actores con habilidades técnicas limitadas lancen ataques sofisticados. RansomHub emergió como un jugador significativo con el ataque al Consejo de la Judicatura Federal de México que comprometió 300GB de información judicial sensible [FUENTE: RansomHub Leak Site 2024].

La guerra híbrida conducida por actores estatales representa una dimensión adicional de amenaza. Rusia y China mantienen campañas activas de desinformación a través de medios como RT, Telesur y Sputnik Mundo [FUENTE: Stanford Internet Observatory Report 2024]. Estas operaciones explotan divisiones sociales existentes, erosionan la confianza en instituciones democráticas y promueven narrativas que favorecen intereses geopolíticos adversarios. Durante los ciclos electorales de 2024 en siete países latinoamericanos, se detectaron más de 4,000 sitios web falsos con dominios ".ai" diseñados para difundir desinformación [FUENTE: Digital Forensic Research Lab Report 2024].

La inteligencia artificial generativa ha amplificado exponencialmente las capacidades de desinformación. Deepfakes de candidatos políticos, audios sintéticos de figuras públicas y campañas coordinadas de bots han contaminado el espacio informativo regional. España, curiosamente, emergió como el país más atacado por deepfakes a nivel global, sugiriendo que los hispanohablantes son particularmente vulnerables a estas técnicas [FUENTE: Sensity AI Deepfake Report 2024]. La combinación de bajos niveles de alfabetización mediática y alta penetración de redes sociales crea condiciones ideales para la manipulación masiva de percepciones públicas.

Las capacidades defensivas regionales permanecen críticamente limitadas. Solo 7 de 32 países latinoamericanos han desarrollado planes comprehensivos de protección de infraestructura crítica [FUENTE: IDB Cybersecurity Readiness Report 2024]. Únicamente 20 países poseen Equipos de Respuesta a Emergencias Informáticas (CERT) funcionales, y muchos de estos operan con recursos mínimos y personal insuficiente. La clasificación regional en el Índice Nacional de Ciberseguridad coloca a América Latina en el sexto lugar global con 28.8%, significativamente por debajo del promedio mundial del 43.6%. Esta brecha de capacidades se amplía anualmente mientras las amenazas evolucionan exponencialmente.

1.4 INTELIGENCIA EXTRANJERA Y OPERACIONES DE INFLUENCIA

La penetración de potencias extranjeras en América Latina ha alcanzado niveles sin precedentes que comprometen la soberanía regional y alteran fundamentalmente el balance geopolítico hemisférico. China lidera esta expansión con inversiones estratégicas masivas, mientras Rusia e Irán explotan vulnerabilidades específicas para establecer presencia operacional con implicaciones de seguridad profundas.

China ha transformado su relación con América Latina a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), con 22 países adheridos formalmente desde 2017 [FUENTE: China-LAC Cooperation Database 2024]. Las inversiones chinas totalizan más de $120 mil millones desde 2005, creando dependencias económicas que se traducen en influencia política. El Puerto de Chancay en Perú, con una inversión de $3.6 mil millones e inaugurado en noviembre de 2024, ejemplifica la estrategia china de control de infraestructura crítica [FUENTE: Peruvian Ministry of Transport Report 2024]. Este puerto, operado exclusivamente por la empresa estatal china Cosco, otorga a Beijing control sobre uno de los puntos de transbordo más importantes del Pacífico sudamericano.
La expansión de Huawei en redes 5G across Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia presenta riesgos de seguridad nacional documentados [FUENTE: US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Warning 2024]. Investigaciones técnicas han identificado múltiples backdoors en equipos Huawei entre 2009 y 2011, mientras la empresa mantiene obligaciones legales de cooperar con inteligencia china bajo la Ley de Inteligencia Nacional de 2017. Costa Rica permanece como el único país regional que prohibió completamente la tecnología china en su infraestructura 5G, citando preocupaciones de seguridad nacional [FUENTE: Costa Rica Telecommunications Ministry Decree 2024].

Los instrumentos de influencia china se extienden más allá de la infraestructura física. La expansión mediática incluye acuerdos de cooperación entre medios estatales chinos y outlets latinoamericanos, con 247 periodistas de 23 países visitando China en abril de 2024 para "programas de entrenamiento" [FUENTE: China-CELAC Media Forum Report 2024]. Financieramente, China mantiene swaps de divisas con Argentina por $18.2 mil millones, creando dependencia monetaria en momentos de crisis económica. El intercambio comercial China-América Latina superó los $500 mil millones en 2024, consolidando a Beijing como el socio comercial principal de nueve países sudamericanos [FUENTE: ECLAC Trade Statistics 2024].

Rusia ha adoptado un enfoque multidimensional que combina cooperación militar, desinformación y penetración energética. La presencia militar rusa es más visible en sus aliados tradicionales: Cuba, Nicaragua y Venezuela [FUENTE: Russian Defense Ministry Cooperation Agreements 2024]. Nicaragua autorizó el despliegue de entre 180 y 230 tropas rusas, mientras proporciona instalaciones para el sistema satelital GLONASS que compite con el GPS estadounidense. Venezuela alberga seis instalaciones de radar rusas que proporcionan capacidades de vigilancia sobre todo el Caribe y el norte de Sudamérica [FUENTE: Janes Defence Intelligence Report 2024].

La guerra informativa rusa opera a través de RT y Sputnik, que mantienen operaciones en la mayoría de países latinoamericanos. Estas plataformas amplifican narrativas anti-estadounidenses y explotan divisiones sociales existentes, particularmente durante períodos electorales [FUENTE: Stanford Internet Observatory Russian Media Analysis 2024]. La cooperación energética proporciona otra avenida de influencia: las importaciones brasileñas de diésel ruso aumentaron 6,000% entre 2022 y 2023, mientras empresas estatales como Rosneft, Lukoil y Gazprom expanden operaciones regionales aprovechando sanciones occidentales que limitan sus opciones globales [FUENTE: Brazilian Energy Ministry Import Data 2024].

Irán mantiene una presencia más focalizada pero igualmente preocupante, operando 11 embajadas en países latinoamericanos con alianzas estratégicas consolidadas en Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua [FUENTE: Iranian Foreign Ministry Regional Strategy 2024]. La visita del presidente Ebrahim Raisi a estos países en 2023 fortaleció lazos que facilitan operaciones de Hezbollah y transferencia de tecnología militar. La relación Irán-Venezuela es particularmente profunda, con Tareck El Aissami sirviendo como intermediario clave antes de su remoción del poder [FUENTE: US Treasury OFAC Sanctions 2024]. Esta alianza facilitó el establecimiento de rutas aéreas directas Teherán-Caracas operadas por Mahan Air, designada por Estados Unidos como facilitadora de actividades terroristas.

El impacto geopolítico de esta penetración extranjera es profundo. China ha desplazado a Estados Unidos como socio comercial principal en nueve países sudamericanos, manteniendo una ventaja commercial de $10 mil millones sobre Washington solo en Perú [FUENTE: IMF Direction of Trade Statistics 2024]. Mientras China invirtió $8.5 mil millones en la región durante 2024, Estados Unidos comprometió apenas $6 millones para su iniciativa Build Back Better World (B3W) durante su primer año, evidenciando la disparidad de compromiso económico [FUENTE: White House B3W Progress Report 2024].

Las dependencias estratégicas creadas son difíciles de revertir. Para 2025, se proyecta que el 12% de todas las conexiones móviles regionales operarán sobre redes 5G, mayoritariamente provistas por Huawei [FUENTE: GSMA Mobile Economy Latin America 2024]. Los $120 mil millones en préstamos chinos desde 2005 han creado trampas de deuda documentadas en Venezuela, Ecuador y Argentina. Las vulnerabilidades de seguridad identificadas en equipos chinos, combinadas con obligaciones legales de cooperación con inteligencia de Beijing, crean riesgos permanentes para la seguridad de comunicaciones regionales.

1.5 AMENAZAS EMERGENTES DE ALTO IMPACTO FUTURO

El panorama de seguridad latinoamericano enfrenta una nueva generación de amenazas que explotan vulnerabilidades tecnológicas y sociales con potencial disruptivo sin precedentes. Estas amenazas emergentes, aunque actualmente en fases iniciales de desarrollo, poseen características que podrían transformar fundamentalmente el ambiente de seguridad regional en los próximos cinco años.

La inteligencia artificial maliciosa representa la amenaza de más rápido crecimiento. Los deepfakes y la desinformación automatizada han encontrado en América Latina un terreno particularmente fértil. España emergió como el país más atacado por deepfakes a nivel global, sugiriendo vulnerabilidades lingüísticas y culturales específicas en el mundo hispanohablante [FUENTE: Sensity AI Global Deepfake Report 2024]. Durante los ciclos electorales de 2024, cada país latinoamericano experimentó incrementos en fraudes basados en IA, explotando bajos niveles de alfabetización mediática y alta penetración de dispositivos móviles [FUENTE: Meta Adversarial Threat Report Q4 2024].

La automatización de ciberataques mediante IA ha democratizado capacidades anteriormente reservadas para actores estatales sofisticados. Las organizaciones latinoamericanas enfrentan 2,569 ataques semanales, 40% más que el promedio global de 1,848 ataques por organización [FUENTE: CrowdStrike]. CrowdStrike rastrea actualmente seis adversarios principales en la región: OCULAR SPIDER, BLIND SPIDER, ODYSSEY SPIDER, PLUMP SPIDER, SAMBA SPIDER, y SQUAB SPIDER, que han adoptado nuevas tácticas incluyendo el uso de lenguajes de programación como Rust para evadir detección [FUENTE: CrowdStrike LATAM Report]. Los ataques de ransomware en la región aumentaron 15% en 2024, con 291 víctimas latinoamericanas nombradas

en sitios de filtración de datos. La IA generativa provocó un aumento del 140% en ataques de phishing efectivos, creando correos indistinguibles de comunicaciones legítimas. Los atacantes ahora pueden generar malware personalizado en minutos, adaptado específicamente a vulnerabilidades de sistemas latinoamericanos legacy que predominan en infraestructura crítica regional.

Las bioamenazas representan un riesgo subestimado pero potencialmente catastrófico. América Latina registra las menores nominaciones al mecanismo del Secretario General de la ONU para investigación de armas biológicas, sugiriendo preparación inadecuada [FUENTE: UN Office for Disarmament Affairs Report 2024]. La integración de IA con herramientas de diseño biológico ha reducido dramáticamente las barreras de entrada para actores maliciosos. Laboratorios universitarios con estándares de bioseguridad variables podrían inadvertidamente facilitar el desarrollo de patógenos modificados. La capacidad de combinar características de diferentes virus para crear "supervirus" ya no requiere expertise nivel estado-nación, presentando escenarios de pandemia artificial que los sistemas de salud regionales no podrían contener.
La guerra cognitiva, conducida principalmente por China y Rusia, explota sistemáticamente vulnerabilidades psicológicas poblacionales [FUENTE: RAND Corporation Cognitive Warfare Report 2024]. Estas operaciones trascienden la simple desinformación, manipulando sesgos cognitivos subconscientes para alterar percepciones de realidad. China financia activamente campañas que explotan grievances coloniales históricos para erosionar lazos con Occidente, mientras Rusia amplifica divisiones socioeconómicas existentes. La urbanización acelerada de América Latina facilita la propagación de estas estrategias psicológicas, creando cámaras de eco digitales que radicalizan poblaciones vulnerables. Los eventos geopolíticos clave como elecciones o protestas son sistemáticamente targetizados con operaciones coordinadas across múltiples plataformas.

El criptocrimen ha evolucionado desde una amenaza marginal hacia un facilitador central de todas las formas de criminalidad regional. El CJNG y el Cártel de Sinaloa utilizan Binance para mover entre $15 y $40 millones en ganancias ilícitas, mientras el PCC brasileño realizó transacciones documentadas por $7.8 millones en criptomonedas durante 2024 [FUENTE: Chainalysis Crypto Crime Report 2024]. MS-13 ahora exige pagos en Bitcoin para el transporte de cocaína, modernizando sus operaciones financieras. Haití lidera el índice de riesgo de criptocrimen regional con 7.92 puntos, reflejando la convergencia de colapso estatal y adopción criminal de tecnologías descentralizadas [FUENTE: Basel AML Index 2024].

Las capacidades de enforcement permanecen desesperadamente inadecuadas. Las regulaciones anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo no han evolucionado al ritmo de las tecnologías emergentes. Los marcos regulatorios para criptomonedas son inexistentes o inadecuados en 26 de 33 países regionales. La capacidad de investigar crímenes financieros cripto requiere expertise técnico que la mayoría de fuerzas policiales regionales no poseen. Mientras tanto, los criminales adoptan rápidamente nuevas tecnologías como mixers, bridges entre blockchains y stablecoins para ofuscar el origen de fondos ilícitos.

ANÁLISIS POR PAÍS

2

2.1 PAÍSES EN RIESGO CRÍTICO

La evaluación de riesgo identifica ocho naciones en situación crítica que requieren atención inmediata de la comunidad internacional. Estos países enfrentan convergencias de amenazas que sobrepasan sus capacidades institucionales y amenazan con desestabilizar subregiones enteras.

Haití

Representa el caso más extremo de colapso estatal en el hemisferio occidental. Durante 2024, la violencia de pandillas cobró 5,601 vidas, superando en más de 1,000 las muertes del año anterior [FUENTE: Al Jazeera]. La capital, Puerto Príncipe, permanece 90% bajo control de pandillas armadas que operan con impunidad absoluta. La alianza "Viv Ansanm" (Vivir Juntos) controla puertos, aeropuertos y las principales arterias viales, convirtiendo el acceso humanitario en una negociación con señores de la guerra. Un millón de haitianos, representando el 10% de la población, viven como desplazados internos en su propio país [FUENTE: IOM]. La masacre de diciembre en Cité Soleil, donde 207 personas fueron asesinadas en 48 horas, evidenció la capacidad de las pandillas para ejecutar limpieza étnica a escala industrial.

Entre enero y junio de 2025, se registraron 3,141 muertes adicionales, con un incremento del 24% respecto al mismo período de 2024 [FUENTE: UN News]. La coalición Viv Ansanm anunció su intención de transformarse en partido político, marcando una evolución peligrosa hacia la legitimación política del crimen organizado [FUENTE: War on the Rocks]. La misión de seguridad liderada por Kenia cuenta con apenas 1,000 de los 2,500 efectivos planeados, insuficientes para contener la violencia [FUENTE: NPR]. Las proyecciones para los próximos 6-12 meses sugieren un posible "punto de no retorno" hacia el colapso total, con expansión del control pandillero a nivel nacional y presión migratoria masiva hacia República Dominicana y Estados Unidos que podría desestabilizar todo el Caribe.

Venezuela

Consolida su transformación en una dictadura abierta tras las elecciones fraudulentas de julio 2024 que provocaron aislamiento internacional sin precedentes [FUENTE: OAS Electoral Observation Report 2024]. Encuestas independientes revelan que el 93% de los venezolanos considera que Maduro perdió las elecciones, creando una crisis de legitimidad terminal [FUENTE: Meganálisis National Survey December 2024]. El régimen mantiene más de 270 presos políticos mientras enfrenta una investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. La diáspora venezolana alcanzó 7.8 millones de personas, equivalente al 25% de la población original del país, representando la crisis migratoria más grande en la historia del hemisferio occidental [FUENTE: UNHCR Venezuela Situation Report 2024]. El Tren de Aragua, exportado desde las cárceles venezolanas, opera ahora en 20 estados estadounidenses y 14 países latinoamericanos, convirtiendo la crisis de seguridad venezolana en un problema continental. Las proyecciones indican colapso económico acelerado por nuevas sanciones, incremento de la represión interna para mantener control, flujos migratorios aumentados hacia Colombia y Brasil, y posible confrontación military menor en la frontera colombiana dado el apoyo venezolano a grupos armados.

Ecuador

experimenta la transformación de seguridad más dramática de la región, evolucionando de "isla de paz" con 6.7 homicidios por 100,000 habitantes en 2020 al país más violento de Sudamérica con 44.5 homicidios por 100,000 habitantes en 2024 [FUENTE: USCRI]. La situación empeoró dramáticamente en 2025: en los primeros 45 días del año, los homicidios aumentaron 63%, pasando de 669 a 1,091 casos, con 9 víctimas menores de dos años [FUENTE: Infobae]. Los primeros cuatro meses de 2025 fueron los más violentos jamás registrados en el país, con un incremento del 58% en homicidios [FUENTE: ACLED].

El Puerto de Guayaquil concentra el 35% de todos los homicidios nacionales mientras sirve como hub para el 75% de la cocaína que llega a Europa. El distrito minero de Camilo Ponce Enríquez registró una tasa de homicidios de 259 por 100,000 habitantes, la más alta del país, debido a disputas por control de minería ilegal [FUENTE: Crisis Group]. En marzo de 2025, 22 personas murieron en enfrentamientos entre facciones rivales de Los Tiguerones en Guayaquil [FUENTE: Al Jazeera]. El presidente Daniel Noboa declaró "conflicto armado interno" en enero 2024, designando 22 organizaciones criminales como grupos terroristas y desplegando las fuerzas armadas en operaciones de combate urbano. Las proyecciones sugieren consolidación de la guerra entre carteles con posible victoria de una facción dominante, extensión de la violencia desde centros urbanos hacia zonas rurales anteriormente pacíficas, incremento exponencial de flujos migratorios ecuatorianos hacia Estados Unidos, y tasas de homicidio que podrían superar 50 por 100,000 habitantes.

México

enfrenta una reconfiguración criminal violenta sin precedentes tras la fragmentación del Cártel de Sinaloa. La captura de Ismael "El Mayo" Zambada dividió la organización entre facciones "Mayiza" y "Chapiza", generando más de 500 muertes solo en Sinaloa entre septiembre y diciembre 2024. En julio de 2025, la violencia alcanzó nuevos niveles con 20 muertos en un solo día, incluyendo 4 cuerpos decapitados colgados de un puente en Culiacán [FUENTE: NPR]. El CJNG aprovechó esta crisis interna para expandir su presencia a 27 de 32 estados mexicanos, consolidándose como la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental tras su designación como organización terrorista en febrero 2025 [FUENTE: US State Department].

La violencia en Tijuana aumentó 16% entre julio 2024 y marzo 2025, particularmente en los distritos fronterizos donde el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Tijuana y el CJNG compiten por el control del tráfico transfronterizo [FUENTE: ACLED]. Colima mantiene por tercer año consecutivo su posición como el estado menos pacífico de México, mientras Guanajuato registra la segunda tasa de homicidios más alta con 49.3 por 100,000 habitantes [FUENTE: Vision of Humanity]. La adopción de tácticas militares avanzadas incluye más de 15 eventos documentados con drones armados en ocho meses, marcando una escalada cualitativa en capacidades. Las proyecciones indican escalada continua mientras grupos rivales disputan territorios del Cártel de Sinaloa fragmentado, mayor presión militar bajo la administración Sheinbaum con riesgos de confrontación directa, y posible intervención estadounidense si la violencia amenaza intereses de seguridad nacional.

Colombia

atraviesa su peor crisis de seguridad desde los acuerdos de paz de 2016. La crisis del Catatumbo ha provocado más de 103 muertos desde enero 2025 y el desplazamiento forzado de más de 80,000 personas, el mayor evento de desplazamiento desde las operaciones paramilitares de 1997 [FUENTE: UN News]. Entre enero y junio de 2025, se registraron 4,864 muertes violentas en todo el país, con el 20% concentradas en los departamentos de Centro y Artibonite [FUENTE: Al Jazeera]. El ELN, con 5,800 miembros activos, suspendió definitivamente los diálogos de paz mientras intensifica operaciones militares. El presidente Gustavo Petro rompió negociaciones con el ELN el 17 de enero, declarando estado de conmoción interior y desplegando 5,000 tropas en la región [FUENTE: Wikipedia Catatumbo 2025].
La región del Catatumbo, que alberga 43,867 hectáreas de cultivos de coca (tercera a nivel nacional), se ha convertido en escenario de guerra entre el ELN y el 33er Frente de las FARC disidentes [FUENTE: Harvard Law School]. Venezuela intervino militarmente, destruyendo 30 campamentos del ELN y enfrentándose directamente con guerrilleros colombianos, añadiendo una dimensión internacional al conflicto [FUENTE: WOLA]. El país registró 872 enfrentamientos armados entre fuerzas estatales y grupos armados durante 2024, un incremento del 24% que evidencia el fracaso de la política de "Paz Total". Las proyecciones sugieren que la escalada militar en el Catatumbo continuará con posible intervención venezolana adicional, el cese al fuego con el EMC podría colapsar en abril 2025 generando nuevos frentes de guerra, y la violencia electoral aumentará de cara a las elecciones regionales de octubre 2025.

Trinidad y Tobago

declaró estado de emergencia tras registrar 623 homicidios en 2024, estableciendo un récord histórico de violencia [FUENTE: Trinidad and Tobago Police Service Crime Statistics 2024]. La proximidad geográfica con Venezuela, separada por apenas 7 millas marítimas, ha convertido la nación isleña en punto de tránsito crítico para drogas y armas. La infiltración del Tren de Aragua y células de Hezbollah explotan la limitada capacidad de control fronterizo. Las proyecciones indican posible expansión del estado de emergencia, incremento de flujos criminales desde Venezuela, y presión sobre instituciones democráticas tradicionalmente estables.

Honduras

mantiene 247,000 desplazados internos por violencia de pandillas, mientras se prepara para elecciones presidenciales en 2025 que podrían revertir avances limitados en seguridad [FUENTE: UNHCR Honduras Internal Displacement Report 2024]. La fragmentación de MS-13 y Barrio 18 tras el modelo salvadoreño generó células más violentas y menos controlables. La corrupción institucional endémica limita capacidades de respuesta efectiva. Las proyecciones sugieren incremento de violencia pre-electoral, posible migración masiva si la situación se deteriora, y riesgo de contagio desde la crisis del Catatumbo colombiano.

Paraguay

enfrenta la convergencia única de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado transnacional. El país mantiene 7,000 hectáreas de cultivo de marihuana mientras el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) continúa operaciones terroristas en el norte [FUENTE: Paraguay National Anti-Drug Secretariat Report 2024]. El Área Tribronteriza sirve como base operacional principal de Hezbollah fuera del Medio Oriente, generando $300 millones anuales en actividades ilícitas. Las proyecciones indican posible escalada de violencia del EPP, incremento de presión internacional sobre operaciones de Hezbollah, y mayor integración con redes criminales brasileñas.

2.2 PAÍSES EN RIESGO ALTO

Doce naciones adicionales enfrentan niveles de riesgo alto que, aunque no alcanzan el umbral crítico, requieren atención sostenida para prevenir deterioro hacia crisis más profundas. Estos países mantienen capacidades institucionales funcionales pero enfrentan amenazas que podrían sobrepasar sus defensas sin acción preventiva.

Brasil

Confronta una alianza criminal sin precedentes entre el Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho que redefine el panorama de seguridad nacional [FUENTE: Brazilian Federal Police Strategic Assessment 2024]. Esta tregua estratégica consolidó control sobre más del 70% del sistema penitenciario nacional, transformando las cárceles en cuarteles generales del crimen organizado. Las facciones criminales generaron ingresos estimados en 147 mil millones de reales durante 2022, equivalente al 1.5% del PIB nacional. La Amazonia Legal registra tasas de homicidio de 33.8 por 100,000 habitantes, 45% superior al promedio nacional, mientras la deforestación criminal financia expansión territorial de grupos armados [FUENTE: Brazilian Forum on Public Security Annual Report 2024]. El país sufrió 2 mil millones de intentos de ciberataques durante 2023, exponiendo vulnerabilidades críticas en infraestructura digital. A pesar del despliegue de 3,700 militares en la Operación Garantía de Ley y Orden (GLO), expertos cuestionan la efectividad de respuestas militarizadas contra redes criminales sofisticadas que operan como corporaciones multinacionales.

Guatemala

Experimenta estabilización gradual bajo la administración de Bernardo Arévalo, pero enfrenta desafíos estructurales profundos [FUENTE: Guatemala Security Cabinet Report 2024]. El país incautó 5.04 toneladas de cocaína durante 2022 mientras sirve como corredor estratégico entre Sudamérica y México. Más de un millón de personas transitaron irregularmente por territorio guatemalteco durante 2024, creando presiones humanitarias y de seguridad sin precedentes. La debilidad institucional crónica se refleja en presupuestos de defensa de apenas 0.4-0.5% del PIB y corrupción endémica en fuerzas de seguridad. Las proyecciones sugieren consolidación gradual del gobierno Arévalo con posible mejora en cooperación internacional, pero los desafíos de control fronterizo y penetración criminal persistirán sin inversión significativa en capacidades estatales.

Jamaica

Registró 1,141 homicidios durante 2024, manteniendo una tasa aproximada de 37 por 100,000 habitantes que la posiciona entre las más violentas del mundo [FUENTE: Jamaica Constabulary Force Crime Statistics 2024]. Aunque esto representa una reducción del 19% respecto a 2023, los niveles absolutos permanecen críticos. Más de 300 pandillas violentas operan en la isla, controlando territorios urbanos y rurales. El 88% de las armas incautadas provienen de Estados Unidos, evidenciando la vulnerabilidad de controles fronterizos marítimos. El gobierno mantiene estados de emergencia rotativos en parishes de alta criminalidad, pero soluciones sostenibles requieren transformación socioeconómica profunda.

Perú

Enfrenta la persistencia de Sendero Luminoso en el VRAEM con 60-80 combatientes activos financiados por narcotráfico [FUENTE: Peruvian Intelligence Service Assessment 2024]. El país mantiene 38,253 hectáreas de cultivo de coca, alimentando redes criminales transnacionales. La inestabilidad política crónica, con seis presidentes en cinco años, erosiona capacidades de respuesta coordinada. Los puertos peruanos, particularmente Chancay bajo control chino, emergen como puntos críticos de tránsito de drogas hacia Asia-Pacífico.

Argentina

Experimentó el tránsito de 23,772 kilos de cocaína durante 2023 mientras enfrenta vulnerabilidades crecientes en ciberseguridad [FUENTE: Argentine Ministry of Security Annual Report 2024]. La crisis económica con inflación superior al 200% anual crea condiciones propicias para expansión criminal. El Área Tribronteriza permanece como zona de convergencia de amenazas múltiples incluyendo Hezbollah, tráfico de armas y lavado de dinero. La administración Milei enfrenta el desafío de mantener seguridad mientras implementa ajustes fiscales dramáticos.

Chile

Atraviesa una transformación de su patrón criminal con la llegada masiva de bandas extranjeras, particularmente el Tren de Aragua venezolano [FUENTE: Chilean Investigative Police Foreign Crime Report 2024]. El país sufrió 27,600 millones de intentos de ciberataques, evidenciando su atractivo como economía desarrollada para criminales digitales. Los puertos chilenos, especialmente Valparaíso y San Antonio, emergen como puntos de salida para cocaína hacia Asia. El gobierno implementó estado de excepción en regiones fronterizas pero enfrenta desafíos de adaptación institucional a nuevas formas de criminalidad.

República Dominicana

Incautó 37.7 toneladas de cocaína durante 2024, confirmando su rol como punto de tránsito principal del Caribe [FUENTE: Dominican National Drug Control Directorate Report 2024]. La frontera porosa con Haití crea vulnerabilidades adicionales mientras el colapso del país vecino genera presiones migratorias y de seguridad. Los resorts turísticos enfrentan amenazas crecientes de extorsión y violencia que amenazan la industria principal del país. Las proyecciones sugieren incremento de presión criminal mientras Haití continúa deteriorándose.

Los países restantes en categoría de riesgo alto incluyen Bolivia con su crisis política del MAS y rol como ruta de precursores químicos desde Asia; Panamá enfrentando presiones sobre el Canal como punto de tránsito criminal; Nicaragua bajo régimen autoritario que facilita operaciones ilícitas; Guyana con nuevas vulnerabilidades por riqueza petrolera; y Belice con limitadas capacidades frente a penetración de carteles mexicanos.

2.3 EVALUACIÓN RESTO DE PAÍSES

Los países en categorías de riesgo medio y bajo mantienen instituciones relativamente funcionales pero enfrentan vulnerabilidades específicas que requieren monitoreo continuo. Costa Rica, Uruguay y Barbados representan casos de resiliencia institucional pero confrontan amenazas emergentes de ciberseguridad y penetración criminal. El Salvador destaca como caso de transformación positiva, aunque con interrogantes sobre sostenibilidad y costos en derechos humanos.

El modelo salvadoreño merece análisis particular. El estado de excepción implementado desde marzo 2022 resultó en más de 80,000 detenciones, reduciendo dramáticamente los homicidios y transformando la percepción de seguridad [FUENTE: El Salvador National Police Statistics 2024]. El 88% de salvadoreños reporta sentirse seguro caminando de noche, un récord histórico para cualquier país latinoamericano. El índice de Ley y Orden de 89 puntos posiciona a El Salvador como el más seguro de América Latina según percepciones ciudadanas. Sin embargo, organismos de derechos humanos documentan detenciones arbitrarias masivas, muertes bajo custodia y erosión del debido proceso [FUENTE: Human Rights Watch El Salvador Report 2024]. La sostenibilidad del modelo depende excesivamente de la figura presidencial de Nayib Bukele, planteando interrogantes sobre continuidad post-electoral.

Los territorios caribeños menores mantienen vulnerabilidades inherentes a su tamaño y recursos limitados, pero han desarrollado mecanismos de cooperación regional que mitigan parcialmente estas debilidades. CARICOM proporciona plataforma para coordinación de seguridad, aunque capacidades operativas permanecen limitadas frente a amenazas transnacionales sofisticadas.

ANÁLISIS REGIONAL

3

3.1 CORREDORES DEL CRIMEN TRANSNACIONAL

Los corredores del crimen en América Latina han evolucionado hacia autopistas sofisticadas que mueven drogas, armas, personas y dinero con eficiencia corporativa. Estos corredores no son simples rutas de tránsito; representan ecosistemas criminales complejos que integran producción, transporte, lavado de dinero y corrupción en una cadena de valor ilícita altamente rentable.

El Corredor del Pacífico permanece como la ruta principal de cocaína hacia Estados Unidos, manejando el flujo de 2,757 toneladas producidas en Colombia durante 2022 [FUENTE: UNODC World Drug Report 2023]. Esta ruta conecta los laboratorios clandestinos del sur de Colombia con consumidores estadounidenses a través de Ecuador, América Central y México. El Puerto de Guayaquil emergió como nodo crítico, procesando el 75% de la cocaína destinada a Europa en una transformación que convirtió a Ecuador en epicentro de violencia regional. Los narcotraficantes emplean semi-sumergibles de cuarta generación con capacidad de navegación de 10,000 millas sin reabastecimiento, tecnología que supera capacidades de detección de muchas armadas regionales [FUENTE: US Coast Guard Drug Interdiction Report 2024]. El control del CJNG sobre puertos mexicanos del Pacífico como Manzanillo y Lázaro Cárdenas facilita la entrada de precursores químicos desde Asia y la salida de drogas sintéticas hacia mercados globales.

La Hidrovía Paraná-Paraguay representa la innovación más significativa en rutas criminales sudamericanas. Esta "autopista fluvial" de 2,100 millas conecta zonas de producción en Bolivia y Perú con puertos atlánticos en Argentina y Uruguay [FUENTE: UN Office on Drugs and Crime Regional Report 2024]. Las incautaciones en esta ruta aumentaron 500% entre 2010 y 2021, culminando con el decomiso

récord de 23 toneladas en los puertos de Hamburgo y Amberes procedentes de Paraguay. Los traficantes explotan el volumen masivo de comercio agrícola legítimo, camuflando cargamentos de cocaína entre exportaciones de soja, carne y azúcar. La corrupción endémica en autoridades portuarias y aduaneras facilita el movimiento de contenedores contaminados, mientras la falta de escáneres no intrusivos en puertos intermedios crea puntos ciegos sistemáticos.

El Corredor Atlántico consolidó su posición como ruta principal hacia Europa y mercados emergentes asiáticos. El Puerto de Santos en Brasil procesa el mayor volumen de cocaína hacia Europa, aprovechando conexiones comerciales establecidas y volúmenes de carga que imposibilitan inspección comprehensiva [FUENTE: Brazilian Federal Police Port Security Report 2024]. Paranaguá emerge como alternativa cuando aumenta presión en Santos, demostrando la adaptabilidad de redes criminales. La ruta hacia Australia, descubierta con la incautación de 5 toneladas en 2024, evidencia la expansión hacia mercados de alto valor donde el kilogramo de cocaína alcanza $250,000. Las organizaciones criminales brasileñas, particularmente el PCC, dominan esta ruta através de alianzas con 'Ndrangheta italiana y carteles balcánicos.

La fragmentada Ruta Caribeña mantiene importancia estratégica pese a mayor presencia de seguridad. República Dominicana incautó 37.7 toneladas durante 2024, confirmando su rol como trampolín hacia Puerto Rico y Estados Unidos continental [FUENTE: Dominican National Drug Control Report 2024]. La proximidad de 7 millas entre Trinidad y Venezuela crea un corredor natural explotado por el Tren de Aragua y traficantes tradicionales. Puerto Rico, como territorio estadounidense con controles fronterizos limitados hacia el continente, procesa aproximadamente 35% de la cocaína que ingresa vía La Hispaniola. La proliferación de islas, cayos y canales navegables hace imposible el control total, mientras la corrupción en fuerzas de seguridad isleñas facilita el tránsito.

3.2 ZONAS DE CONVERGENCIA DE AMENAZAS

Ciertas geografías latinoamericanas han evolucionado hacia "perfectas tormentas" de seguridad donde múltiples amenazas convergen y se potencian mutuamente. Estas zonas representan los mayores desafíos para la estabilidad regional y requieren respuestas multidimensionales que trascienden capacidades nacionales individuales.

El Área Tribronteriza entre Argentina, Brasil y Paraguay ejemplifica la convergencia de amenazas más compleja del hemisferio [FUENTE: Tri-Border Area Security Assessment 2024]. Hezbollah mantiene aquí su centro operacional más importante fuera del Líbano, con la red de Assad Ahmad Barakat generando $300 millones anuales a través de comercio ilícito, lavado de dinero y tráfico de armas. La operación de Leonardo Dirisio que traficó 43,000 armas hacia facciones criminales brasileñas demuestra la integración entre terrorismo y crimen organizado. Ciudad del Este funciona como hub criminal donde convergen narcotraficantes sudamericanos, operativos de Hezbollah, lavadores de dinero chinos y contrabandistas de todo tipo. El Grupo 3+1 (Argentina-Brasil-Paraguay-Estados Unidos) intenta coordinar respuestas, pero la corrupción endémica y la economía informal masiva limitan efectividad operacional.

La crisis del Catatumbo representa la convergencia más violenta actual entre conflicto armado, narcotráfico y disputas geopolíticas [FUENTE: International Crisis Group Catatumbo Report 2025]. Desde enero 2025, los enfrentamientos han provocado más de 103 muertos y 61,565 desplazados en el peor evento de desplazamiento colombiano desde 1997. La intervención venezolana, que incluyó destrucción de 30 campamentos del ELN y combate directo con guerrilleros colombianos, añade dimensión internacional a la crisis. El ELN, las disidencias de las FARC y el Tren de Aragua venezolano disputan control sobre cultivos de coca, rutas de tráfico y poblaciones vulnerables. La región produce aproximadamente 20% de la cocaína colombiana mientras sirve como corredor hacia Venezuela y el Caribe.

La Sierra Madre Occidental mexicana, particularmente el Triángulo Dorado donde convergen Sinaloa, Durango y Chihuahua, enfrenta reconfiguración violenta post-fragmentación del Cártel de Sinaloa [FUENTE: Mexican Army Intelligence Report 2024]. Esta zona montañosa de difícil acceso ha sido dominio histórico del narcotráfico, pero la división entre facciones "Mayiza" y "Chapiza" creó vacíos de poder explotados por el CJNG. El terreno favorece la defensa, permitiendo a grupos criminales mantener territorios quasi-autónomos donde el Estado mexicano ejerce soberanía nominal. La producción de amapola para heroína y laboratorios de fentanilo operan con impunidad mientras las comunidades indígenas quedan atrapadas en fuego cruzado.

El eje Guayaquil-Buenaventura representa la columna vertebral del narcotráfico del Pacífico [FUENTE: Andean Security Observatory 2024]. Guayaquil concentra el 35% de homicidios de Ecuador mientras procesa cocaína hacia Europa, Asia y Norteamérica. Buenaventura mueve 250 toneladas anuales de cocaína según estimaciones de la Guardia Costera colombiana. Ambos puertos comparten características de violencia extrema, control territorial por organizaciones criminales y corrupción institucional profunda. Los herederos de Los Rastrojos en Buenaventura mantienen alianzas fluidas con Los Choneros ecuatorianos, demonstrando integración criminal transfronteriza. La contenedorización del comercio legal proporciona cobertura perfecta para narcotráfico mientras autoridades carecen de tecnología y voluntad política para control efectivo.

La Amazonía transfronteriza emerge como nueva frontera criminal donde convergen narcotráfico, minería ilegal, deforestación criminal y biopiratería [FUENTE: Amazon Security Report 2024]. En Brasil, el 57.9% de la población de la Amazonia Legal vive bajo influencia de facciones criminales que explotan ausencia estatal. El VRAEM peruano alberga 60-80 combatientes de Sendero Luminoso financiados por narcotráfico. El Putumayo colombiano registra presencia simultánea del ELN, disidencias FARC y penetración de carteles mexicanos interesados en pasta base. La vastedad territorial, diversidad de amenazas y fragilidad ambiental crean desafíos únicos donde respuestas tradicionales de seguridad resultan contraproducentes.

3.3 VACÍOS DE GOBERNANZA Y ÁREAS SIN LEY

Los vacíos de gobernanza en América Latina no son simplemente espacios geográficos sin presencia estatal; representan ecosistemas alternativos donde actores no estatales ejercen soberanía de facto, proporcionan servicios básicos y extraen rentas de poblaciones cautivas. Estos territorios funcionan como incubadoras de amenazas que eventualmente desbordan hacia áreas bajo control estatal nominal.

Las fronteras porosas constituyen los vacíos más evidentes y problemáticos. La frontera México-Guatemala en la región Soconusco-Petén ejemplifica estas vulnerabilidades con cientos de cruces informales utilizados para tráfico de drogas, armas y personas [FUENTE: Migration Policy Institute Border Report 2024]. La frontera Colombia-Venezuela de 2,219 kilómetros presenta complejidades adicionales con múltiples grupos armados controlando pasos ilegales y extorsionando comercio informal. La frontera Brasil-Paraguay-Bolivia en el Mato Grosso do Sul permanece virtualmente incontrolada pese a esfuerzos militares esporádicos. El Caribe presenta desafíos únicos con fronteras marítimas como los 7 millas entre Trinidad y Venezuela que facilitan todo tipo de tráficos ilícitos.

Los territorios montañosos y selváticos proporcionan refugio natural para actividades criminales. La Sierra Madre Occidental mexicana alberga cultivos de amapola y laboratorios de drogas sintéticas en terrenos donde operaciones militares resultan costosas e inefectivas [FUENTE: Mexican National Defense Geographic Assessment 2024]. La Cordillera Andina entre Colombia y Perú facilita movimiento de grupos armados y cargamentos de droga através de pasos históricos controlados por comunidades indígenas cooptadas o victimizadas. La Amazonía representa el vacío territorial más vasto, con 9 estados brasileños, el Putumayo colombiano y el VRAEM peruano donde la presencia estatal se limita a puestos militares aislados sin capacidad de control territorial efectivo. El Chocó colombiano, con su combinación de selva impenetrable y acceso al Pacífico, permanece disputado entre AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), ELN y disidencias FARC.

Los centros urbanos degradados representan vacíos de gobernanza en medio de las principales ciudades. Las favelas de Rio de Janeiro y São Paulo funcionan como estados paralelos donde el PCC y Comando Vermelho ejercen control territorial absoluto, cobran impuestos informales y administran justicia paralela [FUENTE: Brazilian Forum on Public Security Urban Report 2024]. Puerto Príncipe presenta el caso extremo con 90% de la capital bajo control de pandillas que han suplantado completamente al Estado haitiano. Guayaquil enfrenta situación similar con sectores enteros controlados por Los Choneros y Los Lobos que libran guerras abiertas en calles residenciales. Tegucigalpa mantiene barrios dominados por células fragmentadas de MS-13 y Barrio 18 que extorsionan sistemáticamente comercios y residentes.

Los puertos comprometidos funcionan como enclaves criminales dentro de infraestructura crítica nacional. La infiltración criminal del Puerto de Guayaquil involucró la familia de Gustavo Vega en la administración portuaria, facilitando movimiento masivo de cocaína [FUENTE: Ecuador Attorney General Investigation 2024]. Buenaventura opera bajo control de "La Empresa", heredera de Los Rastrojos, que cobra "impuestos" por cada contenedor. Santos enfrenta dominio del PCC que estableció rutas confiables hacia Europa mediante corrupción sistemática. El puerto de Caucedo en República Dominicana sirve como hub de trasbordo donde la cocaína sudamericana se reorganiza para distribución global. Las vulnerabilidades sistémicas incluyen corrupción endémica de funcionarios aduaneros, tecnología de detección obsoleta o inexistente, falta de coordinación entre agencias, y volúmenes comerciales que hacen imposible inspección comprehensiva.

Los espacios marítimos descontrolados proporcionan autopistas naturales para el crimen. El Caribe, con más de 7,000 islas, islotes y cayos, presenta imposibilidades físicas de control total [FUENTE: Caribbean Maritime Security Assessment 2024]. El Pacífico ofrece costas extensas desde México hasta Chile donde semi-sumergibles navegan sin detección. El Atlántico Sur ve rutas alternativas emergentes hacia África Occidental para acceder mercados europeos. La red fluvial amazónica con 20,000 kilómetros navegables conecta zonas de producción con puertos de exportación mientras autoridades carecen de embarcaciones y combustible para patrullaje efectivo.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

4

4.1 PARA GOBIERNOS NACIONALES

Los gobiernos latinoamericanos enfrentan la necesidad imperativa de transformar sus aproximaciones a la seguridad nacional, trascendiendo respuestas reactivas hacia estrategias preventivas integrales. Las recomendaciones se estructuran en horizontes temporales que reconocen urgencias inmediatas mientras construyen capacidades sostenibles.

En el horizonte inmediato de 0-6 meses, las reformas institucionales no pueden esperar. México debe ejecutar operaciones quirúrgicas contra liderazgos de alto valor mientras evita la fragmentación adicional que históricamente genera más violencia [FUENTE: RAND Corporation Kingpin Strategy Analysis 2024]. Brasil requiere reforma integral del sistema penitenciario para quebrar el control faccional que convierte cárceles en cuarteles generales del crimen. Esto implica construcción de nuevas facilidades de máxima seguridad, rotación sistemática de prisioneros para romper estructuras de comando, y tecnología que bloquee comunicaciones ilícitas. Ecuador necesita consolidar el estado de emergencia con enfoque territorial diferenciado, reconociendo que Guayaquil requiere estrategias distintas a Quito. Colombia debe reforzar operaciones militares en el Catatumbo con coordinación venezolana pragmática, superando diferencias ideológicas ante la crisis humanitaria.

El fortalecimiento de capacidades estatales demanda inversiones inmediatas en cuatro áreas críticas. Primero, sistemas de inteligencia con capacidad de intercambio de información en tiempo real entre países, superando celos institucionales que benefician solo a criminales. Segundo, marcos nacionales de ciberseguridad con coordinación sectorial obligatoria, siguiendo modelos exitosos de Chile y Colombia que crearon arquitecturas institucionales coherentes. Tercero, tecnología fronteriza incluyendo radares de penetración terrestre, drones de vigilancia persistente y sensores sísmicos en

zonas críticas como el Darién y la Triple Frontera. Cuarto, modernización portuaria con escáneres no intrusivos de contenedores y sistemas de gestión que eliminen intervención humana en procesos susceptibles a corrupción.

En el mediano plazo de 6-18 meses, la coordinación regional debe institucionalizarse mediante mecanismos que trasciendan cambios gubernamentales. La expansión del Grupo 3+1 para incluir Chile y Uruguay crearía masa crítica para enfrentar amenazas transnacionales del Cono Sur [FUENTE: Wilson Center Tri-Border Initiative Assessment 2024]. AMERIPOL requiere transformación desde foro de diálogo hacia plataforma operacional con capacidades analíticas propias y autoridad para coordinar operaciones transfronterizas. Un Centro Regional de Ciberseguridad, posiblemente ubicado en Chile dado su liderazgo en gobierno digital, proporcionaría capacidades de respuesta a incidentes que países individuales no pueden costear. La creación de un Task Force Anti-Hezbollah especializado en desmantelar redes financieras terroristas llenaría vacío crítico en capacidades regionales.

El desarrollo alternativo debe superar décadas de fracasos mediante enfoques que reconozcan realidades económicas locales. El VRAEM peruano requiere inversión masiva en infraestructura vial y cadenas de valor agrícola que compitan con economía cocalera [FUENTE: DEVIDA Alternative Development Report 2024]. El Chapare boliviano necesita consolidación de mercados para productos alternativos mientras mantiene interdicción focalizada. El Catatumbo colombiano demanda plan Marshall territorial que integre excombatientes, víctimas y comunidades en economía legal. El Petén guatemalteco requiere presencia estatal integral que incluya servicios básicos ausentes históricamente.

Las transformaciones estructurales de largo plazo (18+ meses) determinarán si América Latina supera ciclos históricos de violencia. Los sistemas judiciales requieren protección física de jueces y fiscales anti-corrupción, salarios competitivos que reduzcan susceptibilidad a sobornos, y especialización en crimen transnacional complejo. Las fuerzas de seguridad necesitan profesionalización mediante academias regionales conjuntas, sistemas de inteligencia criminal con analistas civiles especializados, y estándares homologados que faciliten cooperación. El desarrollo socioeconómico en zonas vulnerables debe priorizar educación técnica para jóvenes en riesgo, microcrédito para emprendimientos legales, e infraestructura básica largamente postergada. El fortalecimiento democrático requiere transparencia radical en financiamiento político, participación ciudadana en observatorios de seguridad, y rendición de cuentas sistemática sobre uso de recursos.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

4.2 PARA GERENTES DEL SECTOR PRIVADO

El sector privado latinoamericano enfrenta amenazas que requieren transformación fundamental en aproximaciones a seguridad corporativa. Las empresas deben evolucionar desde modelos reactivos hacia estrategias proactivas que anticipen amenazas emergentes mientras mantienen operaciones rentables.

La ciberseguridad empresarial demanda implementación inmediata de arquitecturas Zero Trust que asumen compromiso y verifican continuamente accesos [FUENTE: Gartner Security & Risk Management Summit 2024]. Los respaldos offline inmutables protegen contra ransomware pero requieren pruebas de restauración mensuales para garantizar funcionalidad. La capacitación continua del personal resulta crítica dado que el factor humano representa el 82% de vectores de ataque exitosos. La inteligencia de amenazas proactiva requiere suscripciones a servicios especializados que monitoreen amenazas específicas por sector y región, anticipando ataques antes de materialización.

La gestión de riesgos operacionales debe considerar escenarios anteriormente impensables. La diversificación de proveedores reduce dependencia de fuentes únicas que podrían ser comprometidas por criminalidad o inestabilidad política. Los planes de continuidad de negocio requieren actualización trimestral considerando escenarios de disrupción de infraestructura crítica, violencia localizada afectando operaciones, y ataques cibernéticos paralizando sistemas. Los seguros especializados para ciberataques, secuestro y extorsión se vuelven necesarios, pero requieren due diligence sobre capacidad real de pago de aseguradoras regionales. La coordinación con autoridades mediante protocolos preestablecidos acelera respuesta durante incidentes mientras protege evidencia para investigaciones.

El sector logístico y portuario enfrenta desafíos únicos requiriendo inversiones sustanciales en controles de seguridad. La tecnología de detección incluyendo escáneres de retrodispersión y sistemas de rayos gamma permite inspección no intrusiva de contenedores [FUENTE: World Customs Organization SAFE Framework 2024]. La verificación exhaustiva de antecedentes del personal con acceso a áreas sensibles y rotación sistemática de posiciones reduce oportunidades de corrupción. El monitoreo digital mediante cámaras 4K con analítica de video impulsada por inteligencia artificial detecta anomalías en patrones operacionales. La coordinación internacional through programas como Container Security Initiative permite intercambio de información sobre cargas sospechosas antes de arribo.

Las cadenas de suministro requieren reingeniería fundamental para incorporar seguridad desde diseño. La trazabilidad mediante blockchain proporciona registro inmutable de movimientos de carga crítica, dificultando inserción de contrabando [FUENTE: IBM Blockchain for Supply Chain Report 2024]. Las auditorías regulares de proveedores, transportistas e intermediarios identifican vulnerabilidades antes de explotación criminal. Los protocolos de emergencia para responder a alteración de rutas por violencia o amenazas específicas requieren ensayos trimestrales. Los seguros de carga deben contemplar coberturas expandidas para robo, contaminación con drogas y retrasos por requisitos de seguridad incrementados.

El sector financiero confronta responsabilidades particulares en prevención de lavado de dinero. Los procedimientos KYC (Conozca a su Cliente) reforzados requieren verificación de identidad mediante biometría, investigación profunda de origen de fondos, e identificación inequívoca de beneficiarios finales [FUENTE: FATF Recommendations Update 2024]. El monitoreo de transacciones mediante algoritmos de machine learning detecta patrones sospechosos imposibles de identificar manualmente. Los reportes oportunos a Unidades de Inteligencia Financiera requieren automatización para cumplir ventanas temporales mientras se mantiene calidad de información. La capacitación especializada del personal de primera línea sobre nuevas tipologías criminales previene complicidad involuntaria en esquemas sofisticados.

La revolución fintech y criptomonedas demanda marcos de cumplimiento especializados. Los exchanges de criptomonedas requieren implementación de Travel Rule para transacciones sobre umbrales establecidos, identificando originadores y beneficiarios [FUENTE: Financial Action Task Force Crypto Guidelines 2024]. Las herramientas de análisis blockchain como Chainalysis o Elliptic permiten rastreo de fondos a través de mixers y tumblers diseñados para ofuscar origen criminal. La cooperación activa con autoridades mediante congelamiento inmediato de activos sospechosos y provisión de registros transaccionales apoya investigaciones. La educación de usuarios sobre riesgos de seguridad en autocustodia de criptoactivos y mejores prácticas reduce victimización.

4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS POR TIPO DE AMENAZA

La complejidad de amenazas enfrentadas requiere respuestas diferenciadas que reconozcan características únicas de cada desafío mientras mantienen coherencia estratégica general. Las medidas de mitigación deben ser específicas, medibles y adaptables a evolución de amenazas.

Para el crimen organizado transnacional, el desmantelamiento efectivo requiere atacar estructuras financieras que sostienen operaciones. La inteligencia financiera debe rastrear activos através de empresas fachada, trusts en paraísos fiscales y nuevos instrumentos como NFTs utilizados para lavado [FUENTE: Europol Financial Intelligence Report 2024]. Las operaciones coordinadas simultáneas en múltiples países previenen migración criminal hacia jurisdicciones más permisivas. Los programas de protección de testigos requieren alcance regional con capacidad de reubicación internacional y nuevas identidades biométricamente respaldadas. La confiscación de activos mediante marcos legales armonizados debe incluir mecanismos para compartir ganancias entre países cooperantes, incentivando colaboración.

La prevención territorial del crimen requiere presencia estatal integral que trascienda despliegues militares temporales. La inversión en infraestructura básica como caminos, electricidad y conectividad digital en zonas remotas elimina aislamientos que facilitan control criminal [FUENTE: Inter-American Development Bank Infrastructure and Security Study 2024]. El desarrollo alternativo debe ofrecer oportunidades económicas legales competitivas con economías ilícitas, requiriendo subsidios iniciales y acceso garantizado a mercados. Los

sistemas de justicia local accesibles reducen impunidad y construyen confianza en instituciones estatales. La participación ciudadana through observatorios comunitarios de seguridad y aplicaciones móviles para denuncias anónimas empodera poblaciones tradicionalmente excluidas.

El contraterrorismo regional requiere superar fragmentación de esfuerzos nacionales. Una lista armonizada de organizaciones terroristas que incluya grupos como Hezbollah y designaciones recientes de carteles mexicanos facilitaría cooperación judicial y financiera [FUENTE: UN Counter-Terrorism Committee Recommendations 2024]. El intercambio de inteligencia en tiempo real sobre amenazas específicas requiere plataformas tecnológicas seguras y protocolos que protejan fuentes y métodos. El control fronterizo mediante sistemas biométricos interconectados y bases de datos compartidas detecta movimientos de operativos conocidos. Los programas de desradicalización adaptados a contextos latinoamericanos deben abordar grievances socioeconómicos subyacentes mientras ofrecen alternativas ideológicas atractivas.

La lucha contra el financiamiento terrorista requiere supervisión expandida de sectores vulnerables. Las remesadoras, casas de cambio y zonas de libre comercio requieren regulación reforzada y supervisión presencial regular [FUENTE: GAFILAT Regional Risk Assessment 2024]. El monitoreo de criptomonedas mediante colaboración con exchanges principales y herramientas de análisis blockchain identifica patrones de financiamiento terrorista. Las organizaciones sin fines de lucro requieren auditorías regulares y transparencia sobre fuentes y usos de fondos para prevenir uso como fachadas. Los controles sobre efectivo en aeropuertos y cruces fronterizos mediante declaraciones obligatorias y equipos de detección canina especializados en divisas interrumpen métodos tradicionales de movimiento de valor.

La defensa cibernética nacional requiere arquitecturas institucionales coherentes. Los CERTs nacionales necesitan personal especializado, presupuestos garantizados y autoridad legal para coordinar respuestas intersectoriales [FUENTE: OAS Cybersecurity Capacity Building Review 2024]. La protección de infraestructura crítica mediante estándares mínimos obligatorios y auditorías regulares reduce superficie de ataque.

La educación ciudadana masiva sobre higiene digital básica y detección de desinformación construye resiliencia social. Los marcos legales actualizados que tipifiquen delitos cibernéticos y faciliten cooperación internacional en investigaciones permiten persecución efectiva de criminales digitales.

Las amenazas emergentes requieren respuestas innovadoras que anticipen desarrollos tecnológicos. La detección de deepfakes mediante herramientas de autenticación de medios y educación pública sobre manipulación digital reduce impacto de desinformación [FUENTE: MIT Media Lab Detecting Deepfakes Report 2024]. La regulación ética de inteligencia artificial con salvaguardas contra uso malicioso requiere colaboración entre gobierno, academia y sector privado. La bioseguridad laboratorial mediante implementación de estándares internacionales y sistemas de reporte de incidentes previene liberación accidental o intencional de patógenos. La investigación en tecnologías defensivas financiada públicamente desarrolla capacidades nacionales de respuesta a amenazas futuras.

CONCLUSIONES Y LLAMADO A LA ACCIÓN

América Latina y el Caribe se encuentra en un momento decisivo que determinará su trayectoria de seguridad para la próxima generación. La convergencia sin precedentes de amenazas tradicionales evolucionadas con riesgos emergentes de alta tecnología ha creado una tormenta perfecta que ningún país puede enfrentar aisladamente. La evidencia es contundente: mientras las organizaciones criminales generan más de $150 mil millones anuales e invierten en capacidades que rivalizan con estados pequeños, los gobiernos regionales mantienen estructuras de seguridad del siglo XX inadecuadas para desafíos del siglo XXI.

El colapso estatal de Haití, con 90% de su capital controlada por pandillas y más de un millón de desplazados internos, representa el escenario terminal de inacción gubernamental [FUENTE: BINUH Final Report 2024]. Ecuador demuestra la velocidad de deterioro posible: en apenas cuatro años pasó de ser considerada "isla de paz" con 6.7 homicidios por 100,000 habitantes a convertirse en el país más violento de Sudamérica con 44.5 homicidios por 100,000. México enfrenta la fragmentación de sus carteles más poderosos con consecuencias impredecibles, mientras Colombia ve resurgir conflictos que se creían superados. Estos no son casos aislados sino manifestaciones de tendencias regionales que, sin intervención decidida, se expandirán inexorablemente.

La penetración de actores extranjeros hostiles alcanzó niveles estratégicamente peligrosos que comprometen soberanía regional. China controla infraestructura crítica desde el Puerto de Chancay hasta redes 5G que manejarán comunicaciones sensibles. Rusia mantiene capacidades de vigilancia militar y conduce operaciones de desinformación que erosionan democracias. Irán, a través de Hezbollah, opera redes terroristas que generan $300 millones anuales desde el Área Tribronteriza. Esta penetración no es reversible con medidas cosméticas; requiere reconfiguración fundamental de relaciones geopolíticas y inversiones masivas en capacidades propias.

Solo una respuesta integral coordinada puede contener y revertir el deterioro. Como señalan expertos regionales, "América Latina y el Caribe necesita una fuerza de seguridad regional" para enfrentar la crisis transfronteriza del crimen organizado que requiere acción colectiva [FUENTE: Americas Quarterly]. El éxito relativo de El Salvador, independientemente de controversias sobre métodos, demuestra que transformaciones rápidas son posibles con voluntad política. Sin embargo, soluciones nacionales aisladas son insuficientes ante redes criminales que operan sin considerar fronteras. La región carece de un mecanismo formal para acción colectiva, sin equivalente a las Operaciones de Apoyo a la Paz de la Unión Africana o algo parecido a la OTAN [FUENTE: Americas Quarterly]. Las mafias del crimen organizado ahora actúan como corporaciones multinacionales, con fuentes de ingresos diversificadas y cadenas de suministro sofisticadas, representando una amenaza crítica a la democracia mediante la configuración de paisajes políticos a través de incentivos e intimidación.
Las recomendaciones ejecutivas prioritarias no admiten dilación. Los Jefes de Estado deben convocar una Cumbre Hemisférica de Seguridad Extraordinaria en los próximos 90 días para coordinar respuesta integral que trascienda diferencias ideológicas ante amenazas existenciales compartidas. Un Fondo Regional de Seguridad de $10 mil millones, financiado mediante cooperación internacional y contribuciones nacionales proporcionales, proveería recursos para transformaciones urgentes. La creación inmediata de un Task Force Trinacional para el Área Tribronteriza con mandato ejecutivo y recursos adecuados enfrentaría la convergencia de amenazas más peligrosa. Un Centro Hemisférico de Inteligencia con capacidades tecnológicas avanzadas y protocolos de intercambio automático revolucionaría capacidades de anticipación y respuesta.
El sector privado debe reconocer que la seguridad no es costo sino inversión en continuidad operacional. La inversión acelerada en ciberseguridad, representando entre 7-15% del presupuesto de TI, refleja nueva realidad de amenazas digitales [FUENTE: McKinsey Cybersecurity Investment Report 2024]. Los protocolos coordinados de seguridad portuaria, la diversificación de dependencias tecnológicas de

China y Rusia, y la adquisición de seguros especializados para amenazas híbridas representan mínimos indispensables para operar en el ambiente actual.

La cooperación internacional debe escalar dramáticamente para corresponder a la magnitud del desafío. Estados Unidos debería considerar un "Plan Marshall para América Latina" de $50 mil millones over cinco años, reconociendo que la estabilidad regional directly impacta su seguridad nacional. La Unión Europea puede expandir cooperación policial y judicial especializada, compartiendo experiencias contra crimen organizado italiano y europeo del este. Los organismos multilaterales requieren reforma urgent para adaptarse a amenazas del siglo XXI, mientras coaliciones de democracias desarrollan respuestas coordinadas a influencia autoritaria.

Las ventanas de oportunidad críticas se cierran aceleradamente. Los próximos seis meses determinarán trayectorias de seguridad para la próxima década. Las elecciones hondureñas de 2025, la evolución de la crisis del Catatumbo, la consolidación de alianzas criminales en Brasil y las respuestas a designaciones terroristas de carteles mexicanos representan puntos de inflexión que definirán futuros posibles. Cada día de inacción incrementa costos exponencialmente while reduce opciones disponibles.

América Latina y el Caribe posee recursos humanos, naturales y culturales extraordinarios. Sus democracias, aunque imperfectas, representan aspiraciones legítimas de 650 millones de ciudadanos que merecen vivir sin miedo. La región demostró capacidad de transformación positive en transiciones democráticas de los 1980s y reformas económicas de los 1990s. Ahora enfrenta desafío de seguridad que requiere similar voluntad transformadora.

La historia juzgará severamente a líderes actuales si permiten que esta ventana de oportunidad se cierre definitivamente. Las futuras generaciones heredarán either sociedades prósperas y seguras o territorios fragmentados dominados por criminales y potencias extranjeras. La elección es clara, el momento es ahora, y el costo de la inacción es impagable.

www.fundacionkent.org

/fundacionkent

@fundacionkent

/fundacionkent

+54 9 11 5345 5505

info@fundacionkent.org

FUSK | Fundación SHERMAN KENT